



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN
SALA PRIMERA DE DECISIÓN CIVIL

Medellín, veintinueve (29) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Radicado: 05001 31 03 007 2015 00928 01

SALVAMENTO DEL VOTO

Considera la posición mayoritaria que es factible en las presentes y antes de analizar los fundamentos de la apelación, que en aplicación de los artículos 282 y 278.3 del C. G. del P. se entre a estudiar la prescripción, lo cual es “*por economía procesal*.”, y como en este caso tanto los opositores como los llamados en garantía propusieron tal medio de defensa, entra a evaluar lo mismo, lo cual constituye la columna vertebral de la decisión de la cual discrepo.

El disenso de quien aquí se pronuncia parte de un primer argumento, y este es que estando frente a un apelante único, debe aplicarse el primer enunciado normativo del artículo 328 procesal, en cuanto a que cuando “*El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los*

Comentado [JOBV1]:

argumentos expuestos por el apelante...”, donde en las presentes solo hubo un recurrente, y este fue la parte actora.

En esos términos, cuando sin analizar los argumentos impugnatorios se entra de una vez a estudiar la excepción de prescripción, se está sorprendiendo no solo al recurrente quien nunca basó la apelación en la prosperidad de tal evento extintivo. Sobre ello no hubo debate. Nadie estaba discutiendo tal tema, es la Sala la que *motu proprio* aborda el mismo, prescindiendo de la discusión dialéctica que debió surtir sobre el particular.

Ahora, ciertamente el artículo 278.3 habilita la posibilidad que cuando, entre otras, se encuentre probada la prescripción extintiva, pueda proferirse sentencia anticipada; pero resulta que en las presentes ocurren dos situaciones: 1) la decisión del *a quo* no fue una sentencia anticipada; y 2) por lo menos resulta exótico que tal tipo de fallo se profiera en la segunda instancia.

Si pese a ello, la posición mayoritaria en aras de la motivación de la sentencia estudió el evento extintivo, que como se dijo, no fue motivo de debate, sorprendió a las partes en tal aspecto, conculcándose el debido proceso.

Otra cosa es que se hubiera estudiado lo que tocaba, como era lo relacionado con definir si los actos y negocios impugnados debían

anularse, ello de cara a lo previsto en el artículo 222 del C. de Co., lo que si no sucedió incumple con el deber de motivar la decisión judicial¹.

Claro está que de no haberse superado lo anterior, en el sentido que lo argumentado por el *a quo* no fuera suficiente para negar las pretensiones de la demanda, ahí sí tocaba estudiar las excepciones como lo ordena el artículo 282 procesal civil, en el sentido que “... *si el superior considera infundada aquella excepción resolverá sobre las otras, aunque quien la alegó no haya apelado de la sentencia.*”, pero esa no era la situación, mucho menos obviando lo que fue objeto de debate.

El juez de segunda instancia no puede escoger la excepción que le parezca sin antes abordar lo que fue objeto del debate, bajo riesgo, aún mayor, de pretermitir la instancia.

¹ Sobre este punto, el deber de motivar las decisiones judiciales, la Corte Suprema de Justicia, en Sala Civil, siguiendo su propia línea, ha indicado: “Más adelante, tras hacer un extenso análisis sobre la evolución de la exigencia de motivación de las sentencias judiciales, se dijo que la misma es inherente al debido proceso, lo cual explica la ineficacia de un fallo en que no se ha cumplido la perentoria obligación de poner al descubierto las razones de la decisión, para permitir el examen público de ellas y el ejercicio de los controles que el ordenamiento tiene establecidos... Concretamente respecto de los defectos de motivación que pueden afectar la validez de la sentencia y que viabilizarían la causal de revisión en estudio, prosiguió:... *La muestra recogida, evidencia de manera ostensible la imposibilidad de ocultar que los defectos de argumentación son y han sido causa de aniquilación de los fallos judiciales.(...) Por supuesto que en tales casos la presencia objetiva de argumentos no fue bastante para dar por cumplida la exigencia de motivar, pues en cada caso se determinó que los argumentos eran intolerables, y apenas cumplían como la apariencia... (...) el cuestionamiento a la providencia por “deficiencias graves de motivación”, no puede obedecer a un replanteamiento de la cuestión litigiosa o un disentimiento de la valoración probatoria del fallador, sino la demostración de que la fundamentación que éste brinda es ficticia o supuesta en relación con el tema que se somete a su estudio, por ser ajena al mismo o abiertamente contraria.*”. Citas y cursivas dentro del texto. Sentencia SC5408-2018. Radicación 11001-02-03-000-2014-00691-00. 11 de diciembre de 2018.

Finalmente, como magistrado revisor no puedo decir si comparto o no la decisión (*decisum*), pues de ser lo primero ello me llevaría a una mera aclaración del voto, sino, que al no existir una motivación en relación a lo que fue objeto de debate, deja ausente lo que inicial y medularmente debía resolverse, argumentos con los cuales me separo de la decisión puesta en consideración.

Con el mayor respeto, cordialmente:



JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS
Magistrado